

C.A. de Santiago

Santiago, dos de junio de dos mil veintitrés.

Visto:

Que en causa RUC N°2100088504-2, RIT N°58-2023, seguida ante el Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, por sentencia de catorce de marzo del presente año, en lo que interesa al recurso, se condenó a **VICTOR RENE ÑANCULEO NATALY**, a sufrir la pena de doce años de presidio mayor en su grado medio, como autor del delito de homicidio simple en la persona de la víctima Marcelo Alejandro Soto Soto, previsto y sancionado en el artículo 391 N°2 del Código Penal, en grado consumado, cometido el día 26 de enero de 2021, en la comuna de Renca; y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y de la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

En contra de esta sentencia la Defensoría Penal Pública dedujo, ante la Corte Suprema, recurso de nulidad fundado en la causal de la letra a) del artículo 373 del Código Procesal Penal. En subsidio, invocó la del artículo 374 letra e) en relación a los artículos 342 letra c) y 297 del citado texto legal.

Por resolución de doce de abril de este año, la Excma. Corte Suprema recondujo la causal principal de nulidad, a la prevista en el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal y remitió los antecedentes a esta Corte de Apelaciones para su conocimiento y fallo.

Con fecha dieciséis de mayo pasado, se vio la causa en audiencia a la que concurrieron a alegar el recurrente y el representante del Ministerio Público, fijándose la lectura de sentencia para el día de hoy.

Considerando:

Primero: Que la causal principal fue reconducida por el defensor penal público a la prevista en el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, en relación con los artículos 342 letra c) y 297, del mismo texto legal; por lo que, habiendo sido además interpuesta esta causal en forma subsidiaria, se analizarán en conjunto desde que la argumentación desarrollada en el recurso dice relación con la falta de participación de su defendido en los hechos ilícitos que fueron acreditados por los sentenciadores del grado.



Como primer argumento de este arbitrio de nulidad, indica que durante el desarrollo de la audiencia de juicio oral se infringieron los artículos 19 N° 3 inciso 6° y artículo 19 N° 7 letra f) de la Constitución Política, desde que la sentencia se debe fundar en un proceso previo legalmente tramitado y el respeto a la libertad y seguridad individual referente a la facultad de no declarar en causa criminal contra parientes, prevista en los artículos 93 g), 302, 303, 304 y 305, todos del Código Procesal Penal. Dicha infracción se produjo al momento en que el Tribunal valora, como antecedente para acreditar la participación de su defendido, las declaraciones que en sede policial prestó su madre, la que fue incorporada en juicio a través de la declaración de un funcionario de Carabineros que tomó dicha declaración, en circunstancias que en audiencia de juicio oral ejerció su derecho de no declarar en contra de parientes, por lo no debieron ser valoradas ni utilizadas como antecedente para acreditar uno de los presupuestos de la condena.

Luego de reproducir los considerandos séptimo y décimo tercero de la sentencia, sostiene el recurrente que no existe cuestionamiento en cuanto a que los jueces valoraron la declaración que la madre del imputado prestó ante el funcionario de Carabineros Matías Yáñez Webel, pero le llama poderosamente la atención que en la sentencia se omita que Jennyfer Nataly Naranjo se presentó en la audiencia de juicio oral y que ante la advertencia del Tribunal, decidió no prestar declaración. Sumado a lo anterior debe tenerse en consideración que la defensa, durante la declaración del funcionario Matías Yáñez incidentó en cuanto a la posibilidad que tenía este funcionario de referirse a la declaración de la testigo Jennyfer Nataly Naranjo, lo que fue desestimado por la mayoría del tribunal, permitiendo que la declaración del funcionario Yáñez Weibel pueda referirse a la declaración que tomó a la madre del acusado en sede policial.

Añade que el artículo 302 del Código Procesal Penal es una garantía establecida a favor del ciudadano que es investigado o juzgado, pues reconociéndose el derecho a la no autoincriminación, que también se extiende a los familiares, por lo que no debía permitirse dicha prueba. Por ende, al intentar incorporar lo que declaró un testigo en instancias diferentes a la audiencia de juicio oral, cuando en ésta hizo uso a su derecho a no declarar por razones personales, es una infracción a la forma de incorporar la



prueba en los juicios, ya que, el Código Procesal Penal establece como regla general de recepción de la prueba testimonial la contenida en el artículo 329, estableciendo de manera muy restringida las excepciones a la *declaración personal* de los testigos o peritos. Agrega que el artículo 331 del Código Procesal Penal establece las excepciones al deber de comparecer y declarar en juicio que tienen los testigos, hipótesis bastante restringidas que de ningún modo se configuran en este caso en concreto. Del mismo modo, no existe discusión de que la lectura de *registros o demás documentos que dieran cuenta de las actuaciones policiales* se encuentra absolutamente prohibida, del tenor literal del artículo 334 de la referida codificación.

Indica que tanto el Tribunal que recibe la información como a la defensa les está imposibilitada la posibilidad de *contrainterrogar* al testigo de oídas pre constituido respecto de la declaración que presencié e incorpora en el juicio lo que se vulnera la inmediación del Tribunal como principio que debe regir la incorporación de prueba, como asimismo el derecho que tiene la defensa de confrontar la prueba de cargo, derecho consagrado en los artículos 8.2 letra f) de la Convención Americana de Derechos Humanos, y en el artículo 14.3 letra e) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Sostiene que el vicio es trascendente por cuanto si bien en la sentencia se enumera otros medios de prueba, basa su decisión condenatoria en consideración a la declaración del Carabineros Yáñez Weibel que se refiere a los dichos de Jennifer Nataly.

Como segunda argumentación, indica que el Tribunal al momento de valorar la prueba en la sentencia contradice los principios de la lógica, en concreto el principio de la razón suficiente.

Sostiene que tal como dice la sentencia, no existió discusión en cuanto a la existencia de un delito de homicidio, centrándose toda la discusión en la determinación de la participación o no de su representado en el referido delito. Indica que el vicio de nulidad se configura pues la motivación que entrega la sentencia, para arribar al veredicto condenatorio, infringe el principio de razón suficiente toda vez que no explicita cual es, o cuales son, las razones del porque se arriba a esa conclusión y no a otra.



Afirma que lo relevante es el análisis de los considerandos séptimo, décimo tercero, donde el Tribunal entrega los motivos que justificarían el tener por acreditada la participación. El considerando séptimo se establece que dos son los testigos presenciales del hecho y que presentó el Ministerio público a prestar declaración en la audiencia de juicio: Juan Carlos Vergara Naranjo y Ezequiel Erasmo Caceres Gallegos.

Respecto de lo declarado por Vergara Naranjo, éste no realiza sindicación alguna referente a la participación de su representado en los hechos materia de la acusación durante su declaración ante el Tribunal Oral en lo Penal, tal como lo consigna el considerando cuarto de la sentencia y el mismo considerando séptimo; no obstante lo anterior es relevante señalar que éste último considerando señala que *“El tío del acusado JUAN CARLOS VERGARA NARANJO, a fin de proteger a su sobrino modificó su relato prestado al inicio de la investigación”*, omitiendo señalar cual es la razón o el argumento para afirmar esa finalidad en cuanto a la modificación de su relato.

Luego prestó declaración el funcionario de Carabineros Cesar López Alfaro, quien explicó en estrados que le tomó declaración a Vergara Naranjo el día de los hechos, donde éste le habría señalado que *“Salió y Víctor estaba en el lugar disparando hacia la esquina del pasaje donde estaba Jennyfer, hermana de Juan Carlos, Marcelo Soto, Ezequiel y unos menores. Pidió que sacara a los menores del lugar y hace siete disparos, luego va hacia la esquina donde estaba Marcelo Soto quien se encontraba lesionado y lo llevó en camioneta al hospital.”* En el mismo sentido, el considerando séptimo del fallo señala que este funcionario *“Concurrió al sitio del suceso donde tomó declaración al tío del acusado, Juan Carlos Vergara Naranjo, quien, a horas de la ocurrencia del hecho, afirmó que se encontró con Marcelo Soto Soto en el Puente Calicanto, almorzaron en el Tirso de Molina y llegaron a calle Dionisio N° 977, Renca a las 14:30 y a las 15:23 escuchó gritos y Jennyfer decía que andaba la Policía de Investigaciones y que Víctor había disparado hacia la esquina en la que estaban conversando Marcelo Soto Soto, Jennyfer, Ezequiel y unos menores.”*

En cuanto a la declaración de Ezequiel Caceres, el fallo señala en el considerando séptimo: *El testigo EZEQUIEL ERASMO CACERES GALLEGOS, cambió en parte su declaración prestada al inicio del*



procedimiento, toda vez, en cuanto a la participación del acusado en los hechos, es el único que en el juicio oral refirió que el sujeto que llegó disparando a lo loco venía con su rostro cubierto. En efecto, aun cuando señala que la estatura del acusado coincide con el autor de los disparos y que piensa que fue Víctor Ñanculeo el autor de los disparos, porque el día anterior habían tenido un altercado y lo reconoció en la sala de audiencias, inventa que andaba encapuchado en el juicio oral...”

Refiere que existe una abierta contradicción con lo declarado por el testigo en la audiencia del juicio oral, pues tal como recoge el considerando cuarto el testigo depuso en audiencia de juicio, en cuanto a la participación “No sabe si era él porque andaba encapuchado. El porte del acusado calzaba con el sujeto que disparó.”

De este modo el fallo recoge dos declaraciones de testigos de cargo presentados por el Ministerio Público, una en sede policial y otra prestada durante la audiencia de juicio oral, donde claramente existe una contradicción que no permite arribar a una versión concluyente. De acuerdo a las declaraciones prestadas durante el desarrollo del juicio oral ninguno de los dos testigos pudo sindicar participación de su representado en los hechos, pero en sede policial si lo habrían hecho. Ciertamente una de esas dos declaraciones no es verdadera, pues no puede atribuirse participación en un hecho en una declaración y negarla en otra.

Agrega que en el motivo séptimo, más que valorar la prueba lo que existe es una enunciación de los medios de prueba que se incorporaron en la audiencia de juicio oral, pero la ley impone la obligación de explicitar por qué se arriba a una conclusión. No basta con señalar que los testigos desde etapas iniciales del procedimiento sindicaron a su representado como autor de los disparos, cuando en audiencia de juicio oral no lo hicieron, sino que se requiere señalar y explicitar la razón del porque el Tribunal entiende que el acusado es el autor del delito de homicidio.

Luego en el considerando décimo tercero señala que en base a las declaraciones de los funcionarios policiales, prueba documental consistente en la transcripción de una conversación telefónica que habría sostenido su representado con un tercero, y las referidas declaraciones de Juan Vergara Naranjo y Ezequiel Caceres Gallegos “[...], la participación criminal se



encuentra establecida por diversas fuentes de prueba que corroboran la inferencia probatoria"; sin embargo, se requiere el análisis de los medios de prueba y la justificación, cuestión que aquí no se encuentra pues el Tribunal en la sentencia sólo se limita a la enunciación de los medios de prueba en los que basa su decisión. Es decir, el Tribunal no expone cuales son los antecedentes que permiten *corroborar* el que las declaraciones prestadas fuera de la audiencia de juicio tengan más valor que las prestadas durante el desarrollo del juicio, por lo que al carecer la sentencia de algún hecho, dato, circunstancia externa o independiente a la propia declaración que permita entender por qué se optó por esa, la prestada en instancias preliminares de investigación y no la prestada en juicio, es que hay infracción al principio de la lógica de la razón suficiente, lo que a su vez implica una vulneración a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 297 del Código Procesal Penal, que genera un vicio de nulidad solo reparable con la anulación del juicio y la disposición de la realización de uno nuevo.

Segundo: Que este motivo absoluto de nulidad se remite a los artículos 342 letra c) del Código Procesal Penal en tanto obliga expresamente a los sentenciadores a realizar una *“exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado”*, y 297, en cuanto señala que la fundamentación deberá *“permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegare la sentencia”*.

Tercero: Que cabe tener presente que el establecimiento de los hechos y la valoración de la prueba es una atribución de los jueces de la instancia, por lo que a esta Corte no le corresponde efectuar una nueva valoración y extraer de ella conclusiones, sino que, por el contrario, se debe controlar que la fundamentación de la sentencia no contradiga los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, conforme a lo dispuesto en el artículo 297 del Código Procesal Penal, norma que establece que el juez en el ejercicio de su libertad para valorar la prueba tiene ciertos límites que respetar y, además, consagra el deber de señalar en el fallo el o los medios de prueba mediante los cuales se dieron por acreditados cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados.



El deber de motivación es una garantía del debido proceso por cuanto permite la fiscalización mediante el ejercicio de los recursos procesales y, además, hace posible la comprensión de lo resuelto, debiendo desarrollarse dentro de los parámetros que establece la norma citada y no puede ser el resultado impresiones de los sentenciadores o suposiciones sin sustento en los medios de convicción rendidos en juicio.

Respecto de esta causal la doctrina ha señalado que “(...) *la obligación de fundamentar la decisión por parte del Tribunal en la forma prevista por el legislador obedece en primer lugar a un respeto del debido proceso, y además al derecho de defensa, puesto que dichas garantías fundamentales serían letra muerta si se pudiera resolver el proceso sin motivar su decisión, omitiendo o no ponderando todas las pruebas rendidas en el proceso*”. (Maturana, Cristián y Montero, Raúl. *Derecho Procesal Penal*. Tomo II. Librotecnia, Tercera Edición, Santiago (2017), pp. 1478- 1479).

Cuarto: Que este motivo absoluto de nulidad contempla los siguientes vicios: 1) omisión en la sentencia de los hechos que se dan por probados o los medios de convicción que permiten llegar a una determinada conclusión; 2) infracción en la valoración de la prueba a los principios de la lógica, máximas de la experiencia y conocimientos científicamente afianzados; 3) omisión de valoración de la prueba rendida; y 4) fundamentación que no permite reproducir el razonamiento utilizado para conseguir las decisiones del fallo.

Por ende, el vicio se configura por la deficiencia de la sentencia recurrida en comparación con el modelo de fallo que debe contener los requisitos de validez de los mismos, al tenor de lo dispuesto en los artículos 342 y 297, ambos del Código Procesal Penal.

Quinto: Que en cuanto a la primera alegación, se debe tener presente que el inciso 1° del artículo 302 del Código Procesal Penal dispone que no estarán obligados a declarar el cónyuge o el conviviente del imputado, sus ascendientes o descendientes, sus parientes colaterales hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, su pupilo o su guardador, su adoptante o adoptado.

Luego, el inciso final de la citada norma señala que las personas comprendidas en ese artículo deberán ser informadas acerca de su facultad



de abstenerse, antes de comenzar cada declaración. El testigo podrá retractar en cualquier momento el consentimiento que hubiere dado para prestar su declaración.

Sexto: Que, respecto de la madre del acusado, consta en el motivo décimo tercero, penúltimo párrafo, no solo que ésta hizo uso de la facultad contenida en el artículo 302 del Código Procesal Penal, sino que, el tribunal se pronunció expresamente sobre esta misma alegación de la defensa señalando que: *“... ya encontrándonos derechamente en la etapa de juicio oral, dicho enunciado jurídico permite que determinadas personas, en este caso, en virtud de su vínculo con el acusado, estén exentas de prestar declaración, sin embargo, no permite a los testigos retractarse de la voluntad que prestaron para declarar durante la investigación, máxime si en dicha instancia se les informó de la dispensa de la obligación de declarar contenida en el artículo y, pese a ello, los testigos prestaron su consentimiento en orden a prestar declaración. Al respecto el tribunal no puede partir de la base, sin prueba alguna, que dichas declaraciones de los familiares del acusado fueron prestadas con infracción de garantías fundamentales, de manera que el contenido de los declarado puede y debe ser valorado por el tribunal”*.

□ En efecto, el derecho de no declarar de ciertos testigos –en este caso la progenitora del acusado–, que se encuentra consagrado en el artículo 302 del Código Procesal Penal, al igual que el derecho del imputado a guardar silencio, es renunciable, de manera que nada impide que se ejerza sólo en la etapa del juicio oral, por lo que el beneficiario de dicha facultad puede perfectamente acceder a prestar declaración en cualquier otra fase del procedimiento, tal como ocurrió en este caso, según dio cuenta el funcionario policial Guzmán Pontigo, quien conforme al motivo cuarto del fallo en alzada, señaló expresamente que: *“La mamá en su declaración indicó los apodos del acusado. Le hicieron la declaración del artículo 302 a la mamá, advirtiéndole antes de tomar la declaración”*.

□ **Séptimo:** Que en consecuencia, fluye de la sentencia impugnada que la madre del acusado solo en la audiencia de juicio oral hizo uso de la facultad de no prestar declaración, por lo que, estando ofrecido como testigo el policía Matías Yáñez en el auto de apertura de juicio oral, éste declaró en juicio respecto de lo que Jennyfer Nataly Naranjo le señaló en la diligencia



respectiva, relato que fue debidamente valorado por los jueces de la instancia.

En efecto, el artículo 309 del citado Código dispone que en el procedimiento penal no existirán testigos inhábiles; y en su inciso final reconoce la existencia de testigos presenciales y de oídas, al establecer que: *“Todo testigo dará razón circunstanciada de los hechos sobre los cuales declarar, expresando si los hubiere presenciado, si los dedujere de antecedentes que le fueren conocidos o si los hubiere oído referir a otras personas”*.

Es decir, se trata de un tema de ponderación de los jueces de fondo de los dichos de ese testigo de oídas, mediante el cual se introdujo al juicio el relato que la madre del imputado prestó en la investigación, habiendo ésta, en dicha oportunidad, renunciado a la facultad del artículo 302 del Código Procesal Penal, situación de hecho que no fue cuestionada.

Los artículos 329, 331 y 334 del Código Procesal Penal a los que alude el recurrente no vienen al caso, desde que se refieren a situaciones diversas, habida consideración que, tal como se señaló, el Código del ramo reconoce expresamente a los testigos de oídas, siendo esa la calidad del funcionario cuestionado por la defensa.

Por consiguiente, lo que se advierte es que el defensor pretende extender los alcances de la facultad de la madre el enjuiciado de no declarar en juicio oral, ejercida solo en esa instancia, respecto de otras declaraciones que fueron válidamente prestadas por la misma beneficiaria durante la etapa de investigación. Sin embargo, en definitiva se trata de un tema de valoración privativa de los jueces del grado, los que han fundamentado la sentencia condenatoria no solo en el relato de este testigo de oídas –como indica la defensa-, sino que, mediante un cúmulo de antecedentes de convicción, para lo cual basta leer el motivo décimo tercero del fallo en alzada, todos los cuales les permitieron superar el estándar del artículo 340 del Código Procesal Penal, sin que existan las deficiencias indicadas por el recurrente, por lo que esta alegación será desoída.

Octavo: Que respecto de la segunda alegación, se debe tener presente que cuando una parte invoca una infracción al artículo 297 del Código Procesal Penal, esto es, a las reglas de la lógica, las máximas de la



experiencia y los conocimientos científicamente afianzados por parte de los sentenciadores, debe indicar con precisión en qué se fundamentarían dichas infracciones. En efecto, la mera discrepancia en las conclusiones obtenidas por los jueces del grado no justifica por sí sola una infracción al citado artículo.

Noveno: Que de la lectura del recurso no se advierten los reproches efectuados por la defensa en la decisión de los sentenciadores, en orden a la falta de razón suficiente y con ello superar la presunción de inocencia que ampara al imputado, sino por el contrario, se constata que el fallo realiza un completo análisis de la prueba rendida en el juicio referida precisamente a lo cuestionado, es decir, la participación de Ñaculeo Nataly en el delito de homicidio consumado en la persona de la víctima Marcelo Alejandro Soto Soto, la que estimaron suficiente para superar el baremo de condena de más allá de toda duda razonable contenido en el artículo 340 del Código Procesal Penal.

En efecto, la totalidad de los medios de convicción presentados en juicio fueron debidamente ponderados por los jueces para dar por acreditados, en el motivo noveno los siguientes hechos: *“El día 26 de enero de 2021, aproximadamente a las 15:00 horas, en las afueras del domicilio ubicado en calle Dionisio N° 977 de la comuna de Renca, el acusado **VÍCTOR RENÉ ÑANCULEO NATALY** efectuó diversos disparos, conociendo que en frente suyo se encontraban al menos dos personas, impactando una de las balas a la víctima Marcelo Alejandro Soto Soto quien resultó con una herida torácica pulmonar que en definitiva le causó la muerte”.*

Para dar por probada dicha proposición fáctica los jueces del grado ponderaron debidamente los antecedentes de cargo y de descargo, conforme a lo dispuesto en el artículo 297 del Código Procesal Penal, decantándose por la prueba de cargo. Para lo cual basta leer los motivos séptimo, décimo a décimo tercero, en que los sentenciadores reproducen la prueba rendida y luego realizan un completo análisis de la misma, la que en definitiva les permitió formarse convicción de la ocurrencia del hecho punible por el cual fue sentenciado el imputado, así como de su participación, sin que exista alguna contradicción, laguna o debilidad en la construcción del razonamiento



que permitiera alcanzar una decisión diversa a la que acertadamente arribaron los sentenciadores. Así, se ha dado por superado el estándar previsto en el artículo 340 del Código Procesal Penal para las sentencias condenatorias y se ha cumplido con el deber de corroboración.

En efecto, la sentencia analiza varios medios de convicción para establecer precisamente lo cuestionado por la defensa, referida a la participación del acusado en los hechos acreditados, que en síntesis y en lo que interesa al recurso, son los siguientes, tal como consta en el motivo décimo tercero del fallo en alzada:

1°.- El Subteniente de carabineros Matías Yáñez Weibel, entrevistó y tomó declaración a Jennifer Nataly Naranjo, madre del imputado, quien señaló que había concurrido al Hospital Félix Bulnes por una hora médica siendo acompañada por Marcelo Soto Soto y Ezequiel Cáceres. Luego concurrieron a calle Dionisio N° 977 y después de almuerzo Marcelo Soto Soto y Ezequiel salieron a conversar y apareció su hijo Víctor, amenazó a Ezequiel y efectuó disparos que provocaron la muerte de Marcelo Soto; confirmando que José Guzmán Pontigo, realizó el cardex de reconocimiento que fue exhibido a Ezequiel Cáceres quien reconoció en las imágenes al acusado VÍCTOR ÑANCULEO como el autor de los disparos efectuados el día 26 de enero de 2021 y que le provocaron la muerte a Marcelo Soto. Además, que la madre del acusado le proporcionó el número de teléfono de su hijo;

□2°.- La prueba documental da cuenta de la interceptación telefónica del teléfono del acusado desde el que se registró una conversación con su pareja Katherine, el día 30 de enero de 2021, en la que reconoce haber realizado los disparos, causando la muerte de Marcelo Soto Soto. El testigo reconoció en la foto N° 1 del set de fotografías N° 1 letra C, el número celular Entel del acusado Víctor Ñanculeo, que obtuvieron de la declaración de la madre del acusado. En la transcripción de comunicación telefónica desde fono +569-56609697, hacia el fono +569-36758711 de fecha 30 de enero de 2021, entre el acusado Víctor y Katherine;

3°.- Además, Ezequiel Erasmo Cáceres Gallegos, desde los albores de la investigación y en el juicio oral sindicó al acusado como el autor de los disparos que causaron la muerte a Marcelo Soto Soto;



4°.- El testigo César López Alfaro, tomó declaración al inicio de la investigación Ezequiel Erasmo Cáceres Gallegos, quien señaló que vio a Víctor Ñanculeo llegar al paseo quien apareció disparando, hiriendo a Marcelo Soto, por lo que lo tomaron, lo subieron a la camioneta y lo llevaron al hospital Félix Bulnes;

5°.- El testigo Juan Carlos Vergara recogió el día de los hechos las vainas del sitio del suceso y las entregó a la policía y sindicó también al acusado desde el inicio de la investigación como el autor de los disparos.

Este cúmulo de antecedentes permitió a los sentenciadores acreditar la participación del acusado en el hecho punible por el cual fue acusado el imputado, esto es, homicidio.

Además, en el motivo cuarto referido a la prueba incorporada en juicio oral, se advierte que Ezequiel Cáceres señaló que: *“Piensa que el sujeto encapuchado era Víctor por el alegato que habían tenido. Fueron como 5 o 6 disparos los que fueron realizados. Todos decían que había sido Víctor por el alegato del día anterior”; “No sabe si era él porque andaba encapuchado. El porte del acusado calzaba con el sujeto que disparó”; “En su declaración policial dijo que fue Víctor quien disparó porque habían discutido. Cree que los disparos iban dirigidos a él, pero le llegaron al cuete a Marcelo”*. Luego, en el motivo séptimo, los jueces del grado explican por qué se decantaron por la declaración investigativa, indicando que: *“El testigo EZEQUIEL ERASMO CACERES GALLEGOS, cambió en parte su declaración prestada al inicio del procedimiento, toda vez, en cuanto a la participación del acusado en los hechos, es el único que en el juicio oral refirió que el sujeto que llegó disparando a lo loco venía con su rostro cubierto. En efecto, aun cuando señala que la estatura del acusado coincide con el autor de los disparos y que piensa que fue Víctor Ñanculeo el autor de los disparos, porque el día anterior habían tenido un altercado y lo reconoció en la sala de audiencias, inventa que andaba encapuchado en el juicio oral”*.

Respecto de Juan Carlos Vergara Naranjo, los sentenciadores en el motivo séptimo indican el por qué le dan menor valor probatorio a los dichos del testigo en juicio, explicando que: *“El tío del acusado JUAN CARLOS VERGARA NARANJO, a fin de proteger a su sobrino modificó su relato prestado al inicio de la investigación. De hecho, afirmó que no quería*



declarar, sin embargo, estando obligado por la ley a prestar declaración en el juicio oral, señaló que estaba acostado durmiendo, sintió un disparo, se levantó a mirar y vio herido a su cuñado Marcelo Soto Soto, salió a ayudarlo, pero la víctima estaba sangrando desde el pecho, Lily y Jennifer le dijeron que le habían disparado y Ezequiel llevó a la víctima al hospital en una camioneta”.

Décimo: Que conforme a lo antes dicho, no se advierte alguna contradicción o deficiencia en la construcción de la sentencia, sino que, por el contrario, los sentenciadores, analizando la totalidad de la prueba rendida en el juicio oral, entregaron los motivos del por qué le otorgaron valor probatorio a la prueba de cargo para establecer la participación del acusado como autor del homicidio, en especial, se hicieron cargo de los reproches de la defensa, ya que, al contrario de lo sostenido por dicho interviniente, los jueces sí explican el motivo para otorgarle mayor valor a los dichos de los testigos prestados durante la investigación. Así las cosas, se trata de una decisión que se encuentra debidamente fundada, sin que exista duda razonable al respecto.

Undécimo: Que de este modo, la prueba que fue rendida en juicio permitió a los jueces arribar a la conclusión que al enjuiciado le cupo participación culpable y penada por la ley en los hechos por los cuales fue acusado, los cuales configuran el tipo penal por el que se dedujo acusación fiscal, no advirtiendo la omisión de hechos relevantes que vulneren el principio de la razón suficiente ni vayan contra la valoración de la prueba rendida.

En efecto, el sistema probatorio en materia penal se rige por el artículo 295 del Código Procesal Penal, norma que establece la libertad de prueba, disponiendo que todos los hechos y circunstancias pertinentes para la adecuada solución del caso sometido a enjuiciamiento podrán ser probados por cualquier medio producido e incorporado en conformidad a la ley.

Así las cosas, la supuesta contradicción o ausencia de valoración de la prueba que reprocha el recurrente se funda más bien en una crítica a la sentencia, por cuanto no impugna alguna premisa objetiva de razonamiento, sino que, se basa en cuestionar más bien ciertas partes de los relatos de los testigos, que a su juicio serían contradictorios. Sin embargo, se advierte que



sus reproches se basan en una apreciación distinta de la valoración de la prueba que debía tener según sus intereses, sin poder determinar cómo dicha valoración influye en la ponderación de dichos medios de convicción o en la decisión de los jueces o de qué forma se podría haber arribado a una decisión diversa.

Por ende, no existe contradicción al principio lógico de razón suficiente ni falta de corroboración, desde que, los jueces dieron por probado que el acusado tuvo participación como autor en el hecho punible que fue debidamente acreditado, conforme a un cúmulo de datos que le fueron presentados conforme al principio de inmediación, los que en definitiva le permitieron formarse convicción respecto de la existencia del delito de homicidio y la participación culpable y penada por la ley del imputado en el mismo.

Por todo lo razonado, las conclusiones del fallo pueden inferirse adecuadamente de la prueba rendida en la audiencia de juicio oral simplificado, por lo que se estima que se ha cumplido con la exigencia prevista en el artículo 297 del Código Procesal Penal.

Duodécimo: Que en definitiva, la fundamentación de la sentencia resulta más que suficiente para explicar el razonamiento que los jueces utilizaron para alcanzar sus conclusiones, al efectuar una exposición clara, lógica y completa sobre cómo llegaron a dar por probados los hechos contenidos en la acusación y la participación del acusado en el mismo, estimándose que la sentencia impugnada está completa y cumple con los fundamentos de claridad, armonía, lógica y congruencia que deben tener las sentencias.

Por lo que, en realidad, lo que se objeta por la defensa es que la prueba de cargo habría sido valorada de un modo diferente al que pretendía dicho interviniente, más que hacer un verdadero cuestionamiento de fondo, pretende, por esta vía, que esta Corte valore y pondere nuevamente la prueba, lo que no constituye la causal invocada, por cuanto se trata de una actividad que le corresponde al tribunal de la instancia, máxime si los jueces indicaron detalladamente por qué le daban valor probatorio a las pruebas de cargo que la defensa reprocha y por qué estimaron que no existe duda razonable, sin que dicha valoración implique vulnerar la sana crítica.



Por lo explicitado, la prueba de cargo, que ha sido valorada acertadamente por los sentenciadores, ha superado el estándar de más allá de toda duda razonable, contenido en el artículo 340 del Código Procesal Penal y, de ese modo, ha logrado derribar la presunción de inocencia que amparaba al imputado y que está contenido en el artículo 4 del mismo texto legal, lo que impide que el presente arbitrio procesal pueda prosperar.

Por estas consideraciones, citas legales y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 372 y 384 del Código Procesal Penal, **se rechaza** el recurso de nulidad interpuesto por la defensora penal pública, doña Paula Quinteros Díaz, en representación del sentenciado **VICTOR RENE ÑANCULEO NATALY**, en contra de la sentencia de catorce de marzo del presente año, dictada por el Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, en causa RUC N°2100088504-2, RIT N°58-2023, en consecuencia, ella no es nula.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción de la ministra (S) señora Erika Villegas Pavlich.

N°Penal-1760-2023.



Pronunciado por la Undécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministro Miguel Eduardo Vazquez P. y los Ministros (as) Suplentes Carlos Escobar S., Erika Andrea Villegas P. Santiago, dos de junio de dos mil veintitrés.

En Santiago, a dos de junio de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

